

ecos



Activistas

Boletín / Enero 2025 / Año 11, N°10

VOCES Y LUCHAS DE AMÉRICA LATINA



ECOS ACTIVISTAS

Autores:

Danitza Cenepo Tapullima (San Martín)

Mariana Campos Vega (México)

Rosa Luz Checca Aparicio (Cusco)

Ruddy Andres Cabello Iraipi (Bolivia)

Yanela del Rosario Suarez (Junín)

**Publicación realizada por
el Movimiento Ciudadano
Frente al Cambio climático**

Avenida del Ejército 1218, departamento 402,
Magdalena del Mar-Lima
www.mocicc.org

Cuidado de edición:

Gloria Alvitres Aliaga

Concepto gráfico, diagramación,
Ilustración de portada y contraportada:

Oscar Díaz Murrieta

Tiraje: 1000 ejemplares
Enero del 2025

Impreso por:

Gama gráfica S.R.L.

Jr. Riso 560-Lince

gama grafica@terra.com.pe

Todos los derechos reservados, es una publicación de distribución gratuita. Queda prohibida su comercialización.

EDITORIAL

LATINOAMÉRICA, EL ACTIVISMO Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Las negociaciones de la convención sobre cambio climático se realizarán el 2025 en Latinoamérica después de 11 años. Brasil será la sede que recibirá el próximo noviembre a la COP30 sobre cambio climático, en un año que será clave para la incidencia de los movimientos sociales que exigen acciones inmediatas y claras para hacer frente a los impactos de la crisis climática.

El presente número del boletín Ecos activistas se inscribe dentro de este proceso de acción climática, en el que voces de jóvenes de países como México, Bolivia y Perú hablan sobre sus propios procesos de activismo e historias de lucha dentro de sus territorios y desde sus resistencias. Así, desde el pueblo Kichwa en la Amazonía norte, Danitza Cenepo narra los esfuerzo para mantener la relación con sus territorios; desde México, Mariana Campos escribe una crónica que nos cuenta cómo un grupo de estudiantes decidieron organizarse para llevar un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para obtener una opinión consultiva sobre su derecho al acceso de la justicia climática; también, Rosa Checca aborda la historia de mujeres en Espinar-Cusco y cómo la llegada de la minera afectó sus vidas y su economía, iniciando un proceso de movilización y resistencia femenina.

Por estas páginas, también nos acercaremos al pueblo Gwarayú en el oriente boliviano, Ruddy Cabello escribe sobre lo que significa ser un activista joven en un contexto de crisis climática. Las juventudes se organizan y resisten. Finalmente, Yanela Suarez conjuga el arte y el activismo, que no renuncia a la memoria histórica de un país como el Perú, sino que evoca, a propósito de su bicentenario, el camino que se elige como activista.

En este contexto de crisis climática, se hace imprescindible escuchar estas voces y muchas otras que comprenden el sentido de urgencia y de prioridad que enfrentamos. El 2025 se abre la oportunidad de congregarse y unirse en una gran corriente continental de denuncia, pero también de propuesta. Es necesario llegar a la Cumbre de los pueblos en Brasil, que se realizará de manera paralela a la Cop30, con las voces legítimas de los pueblos, de todos los pueblos de América Latina y del mundo, para exigir que la acción climática sea ahora; porque ya no se puede perder más tiempo.

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático -MOCICC



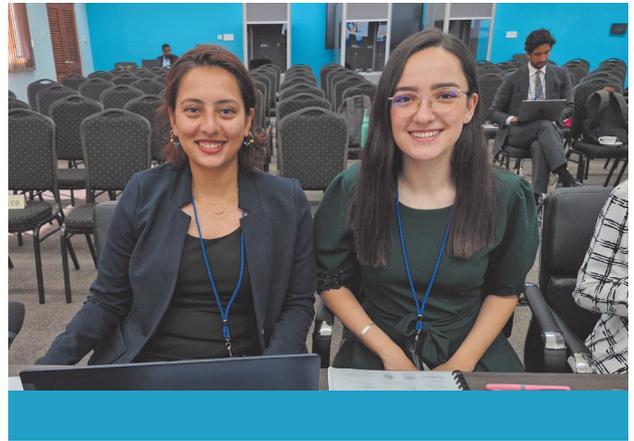
1. SOY ACTIVISTA KICHWA Y MI VOZ ES IMPORTANTE

Por Danitza Cenepo Tapullima
Perú, pueblo Kichwa, región San Martín
Red de Mujeres de la CODEPISAM



2. DE LAS AULAS A LA CORTE MUNDIAL: JUSTICIA CLIMÁTICA EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Por Mariana Campos Vega
México



3. LA HUELLA FEMENINA EN ESPINAR

Por Rosa Luz Checca Aparicio
Activista.



4. SER ACTIVISTA JOVEN EN UN CONTEXTO DE CRISIS CLIMÁTICA

Ruddy Andres Cabello Iraipi
Activista Indigena Gwarayu
Bolivia



5. SIENDO ARTIVISTA DE UN PAÍS EN DECONSTRUCCIÓN

Yanela Suarez
artista independiente
investigadora socio cultural





Danitza Cenepo // Foto: Pavel Martiarena

1. SOY ACTIVISTA KICHWA Y MI VOZ ES IMPORTANTE

Por Danitza Cenepo Tapullima
Perú, pueblo Kichwa, región San Martín
Red de Mujeres de la CODEPISAM

Los pueblos indígenas y originarios del Perú y el mundo hemos mantenido una conexión profunda con la naturaleza: con la tierra, el agua y el territorio en general. Sin embargo, hoy esa relación está en riesgo debido a la crisis climática, que afecta a nuestras comunidades y territorios. Desde nuestro activismo como líderes y lideresas indígenas, tanto adultos como jóvenes, defendemos esta conexión ancestral con la Yaku Mama, la Pacha Mama y nuestras deidades.

Para nosotros, la naturaleza es sagrada. Vemos la tierra, las montañas, los ríos y nuestras fuentes de agua como seres vivos que merecen respeto, protección y cuidado. Desde las comunidades nativas, preservamos conocimientos y prácticas ancestrales de sostenibilidad, aplicándolos en la agricultura, el manejo de la biodiversidad y la conservación del entorno.

Estos saberes han permitido nuestra coexistencia armónica con el territorio durante generaciones.

Mantener esta relación con el territorio implica riesgos, ya que muchas comunidades nativas enfrentamos la explotación de nuestros territorios: invasión, tráfico de madera y tierras, minería ilegal y deforestación. Esta lucha también ha cobrado vidas; hasta hoy, más de 30 defensores ambientales indígenas han sido asesinados. Mi comunidad, además, ha sufrido despojo territorial con la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) dentro de nuestro territorio ancestral, establecido sin consulta ni consentimiento previo, vulnerando nuestros derechos colectivos y los tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas.

Como activista indígena, siento la responsabilidad de proteger los derechos colectivos, el territorio y todo lo que hay en ella, para que las futuras generaciones puedan vivir con dignidad y en armonía con la naturaleza, siguiendo el Sumak Kawsay o Buen Vivir, según nuestra cosmovisión indígena.

Hoy, ser una mujer indígena activista es enfrentar la crisis climática desde la discriminación. Existen prejuicios que deslegitiman nuestro papel y esfuerzos tanto en nuestras comunidades como en espacios externos. La lucha por la igualdad de género y la justicia climática están entrelazadas, pues las normas sociales limitan la participación activa de las mujeres en movimientos de liderazgo y subestiman nuestro rol en la conservación de nuestros territorios.

Además, tenemos escasa representación en espacios de toma de decisiones ambientales, derechos humanos y otros temas cruciales. Aunque se dice que los jóvenes somos el futuro, nuestras voces no son escuchadas, ni respetadas, ni valoradas. También enfrentamos dificultades para acceder a financiamiento, capacitación y recursos esenciales para nuestras iniciativas. La crisis climática impacta desproporcionadamente a las comunidades indígenas, lo que ha puesto en pérdida la biodiversidad, territorios y cultura.

**HOY, SER UNA MUJER
INDÍGENA ACTIVISTA ES
ENFRENTAR LA CRISIS
CLIMÁTICA DESDE LA
DISCRIMINACIÓN**

Los cambios climáticos también amenazan nuestras prácticas agrícolas y el acceso a especies clave para nuestra subsistencia y medicina. Por ejemplo, este año 2024, en el valle del Bajo Huallaga, muchas comunidades hemos sufrido escasez de alimentos debido a la disminución de la pesca.

En algunos casos, el cambio climático también nos ha desplazado de nuestros territorios, como ocurrió con los incendios forestales recientes, que afectaron gravemente nuestros territorios y recibieron escaso apoyo del Estado. Hubo 26 fallecidos y pérdidas significativas de biodiversidad.

No obstante, pese a estos desafíos, las comunidades indígenas mostramos una gran resiliencia. Seguimos adaptándonos mediante nuestros conocimientos ancestrales y defendiendo nuestros derechos individuales y colectivos, promoviendo políticas que reconozcan nuestra conexión con la naturaleza y nuestra importancia en la lucha contra el cambio climático.



Jhac Brayan Apagüño Tapullima

Es esencial que nuestras voces juveniles sean escuchadas en las discusiones sobre soluciones climáticas, pues aportamos experiencias únicas desde nuestra cosmovisión indígena. Sabemos que adaptarnos al cambio climático es un proceso lento, pero mantenemos la esperanza y la resiliencia a través del aprendizaje intergeneracional.

Con el apoyo de ONGs, en mi comunidad Kichwa Ishkay Urmanayuk Tununtunumba, la Asociación de Abuelos y Abuelas Purga Waska trabaja con niños y niñas, transmitiéndoles el idioma quechua, la artesanía, la reforestación, el cuidado de los recursos hídricos y prácticas ancestrales que sostienen nuestra identidad como pueblo indígena.

Las plataformas digitales también son una herramienta clave para amplificar mi voz, la de mi comunidad y la de otros pueblos indígenas en la región San Martín, permiti-

éndonos conectar con activistas de todo el mundo. Porque el activismo climático abarca también justicia social, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y equidad de género.

Jóvenes, es hora de actuar. Como activista joven e indígena, participo en varias iniciativas para generar un impacto positivo en mi comunidad y otros lugares. He formado parte de la junta directiva de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga, de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM) y de la Red de Mujeres de la CODEPISAM, donde organizo talleres y charlas sobre derechos, seguridad alimentaria y liderazgo de mujeres, entre otros temas.



La Red de Mujeres, que incluye a los pueblos Kichwa, Shawi y Awajún, ha creado el Protocolo Intercultural para atender casos de violencia contra la mujer y miembros de la familia del pueblo Kichwa, cubriendo 91 comunidades. Este trabajo ha visibilizado la importancia de atender la violencia de género en nuestras comunidades.

También participo en iniciativas de reforestación y limpieza de espacios naturales, y uso las redes sociales para dar voz a mi comunidad, conectando con otros activistas y promoviendo la justicia climática. La creación de alianzas con organizaciones locales e internacionales refuerza nuestras acciones y amplifica nuestras demandas en foros nacionales e internacionales, abogando por políticas que respeten nuestros derechos y conocimientos tradicionales.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo contribuyo a la lucha contra la crisis climática y por los derechos de los pueblos indígenas. Mi compromiso es seguir trabajando para construir un futuro sostenible en el que los pueblos indígenas sean respetados y valorados.

LAS PLATAFORMAS DIGITALES TAMBIÉN SON UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA AMPLIFICAR MI VOZ, LA DE MI COMUNIDAD Y LA DE OTROS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN





2.

DE LAS AULAS A LA CORTE MUNDIAL: JUSTICIA CLIMÁTICA EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Por Mariana Campos Vega
México

Foto: World's Youth for Climate Justice

Imagina que tienes cuatro años de edad, pero vives en un mundo donde te esperan más del doble de inundaciones, sequías y pérdidas de cultivo que las que experimentaron tus padres o abuelos. No solo eso. También enfrentarás casi siete veces más olas de calor. Según un informe de Save the Children, si naciste en 2020, ese es el futuro que te espera.

La vulnerabilidad al cambio climático, entre muchos otros factores, está relacionada con la edad. Las infancias, juventudes y futuras generaciones serán las más afectadas por las consecuencias del cambio climático. Por ese motivo, su participación en la toma de decisiones no solo es necesaria, sino esencial.

Una idea en un salón de clases puede llegar a transformar el mundo por completo. Esto quedó demostrado en 2019, cuando un grupo de veintisiete estudiantes del Pacífico Sur, preocupados por el impacto del cambio climático en sus comunidades y frustrados

por la inacción global, concibió una idea «sencilla» pero revolucionaria: llevar la problemática a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para obtener una opinión consultiva.

¿QUÉ ES LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y QUÉ SON LAS OPINIONES CONSULTIVAS?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de la ONU. Se encarga de resolver disputas entre Estados y también emite opiniones consultivas, que son interpretaciones del derecho internacional solicitadas por órganos o entidades de la ONU. Aunque estas opiniones no son legalmente vinculantes, tienen gran peso y pueden influir en la conducta de los Estados y en la evolución del derecho internacional.

Fue así como nació Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), una organización de jóvenes del Pacífico que impulsó esta iniciativa. Llevó su propuesta al Foro de las Islas del Pacífico (PIF, por su sigla en inglés) para buscar apoyo oficial.

CONSTRUCCIÓN DE UNA CAMPAÑA GLOBAL

La PISFCC sabía que la lucha contra el cambio climático debía ser inclusiva y global, por lo que su iniciativa se fortaleció con la creación de World's Youth for Climate Justice (WYCJ), una iniciativa que une en esta misión a jóvenes de todo el mundo: América Latina, Asia, Europa, África y el Caribe.

En 2022, con el respaldo del PIF, liderado por Vanuatu, se presentó oficialmente la solicitud de una opinión consultiva a la CIJ. Este respaldo fue crucial para la región del Pacífico, una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero aún era necesario convencer a la Asamblea General de las Naciones Unidas de que adoptara una resolución formal, un paso imprescindible para que la CIJ pudiera abordar el asunto.

El 29 de marzo de 2023, tras una campaña intensa liderada por PISFCC, WYCJ y más de 1 500 organizaciones que formaron la Alianza por una Opinión Consultiva sobre Cambio Climático, junto con el liderazgo diplomático de Vanuatu y otros países del Pacífico, la Asamblea General adoptó por unanimidad la Resolución 77/276. Este momento histórico dio a la CIJ la oportunidad de tratar por primera vez el tema del cambio climático.

La resolución plantea dos preguntas clave: ¿cuáles son las obligaciones de los Estados para proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras? ¿Y cuáles son las consecuencias legales para los Estados que causen daños significativos al clima?

**LAS JUVENTUDES
LIDERAN ESTE
MOMENTO DECISIVO
PARA EL PLANETA**



Foto: World's Youth for Climate Justice

EL ROL DE WYCJ LATINOAMÉRICA

Desde el inicio de la campaña, World's Youth for Climate Justice ha trabajado para incluir a las juventudes en el proceso. Una herramienta clave ha sido el Manual de Justicia Climática Juvenil, redactado por jóvenes expertos. El manual explica cómo el derecho puede servir para promover la justicia climática, la equidad intergeneracional (la idea de que las generaciones presentes deben proteger los recursos para las futuras) y la interseccionalidad (reconociendo cómo múltiples factores afectan la vulnerabilidad climática).

Como las juventudes no pueden participar directamente ante la CIJ, activistas de WYCJ han distribuido el manual a varios Estados, buscando influir en sus escritos ante la Corte. WYCJ Latinoamérica ha impulsado a los Ministerios de Relaciones Exteriores en México, Chile, Colombia, y otros países, para incluir las propuestas del manual en sus intervenciones. También ha solicitado que jóvenes y comunidades vulnerables sean parte de las delegaciones en las audiencias orales.

El 22 de marzo de 2024, la CIJ anunció que recibió un número récord de declaraciones escritas para un procedimiento consultivo, destacando la significativa participación de Latinoamérica. La intervención activa de las juventudes ha sido decisiva.

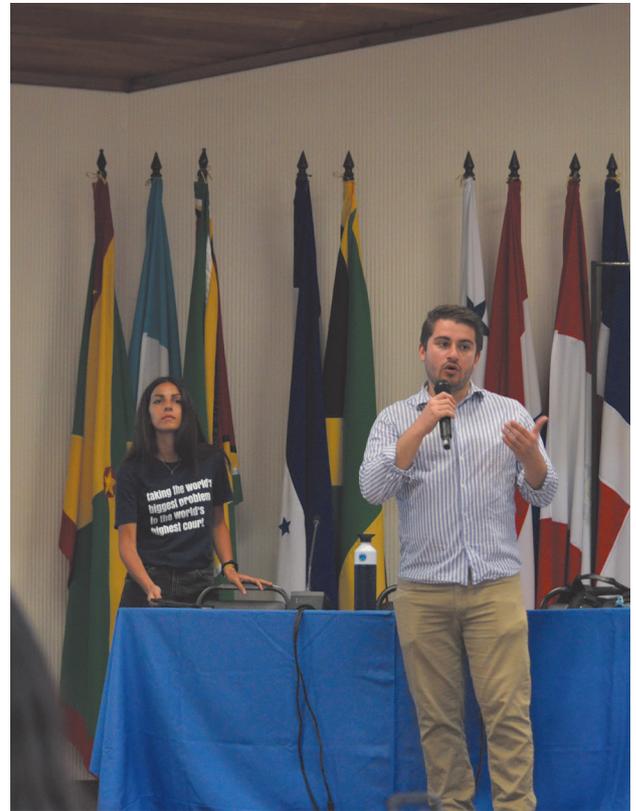


Foto: World's Youth for Climate Justice

**LAS INFANCIAS,
JUVENTUDES Y FUTURAS
GENERACIONES SERÁN
LAS MÁS AFECTADAS
POR LAS CONSECUENCIAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO**



Foto: World's Youth for Climate Justice

JUSTICIA INTERGENERACIONAL EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también está trabajando en una opinión consultiva sobre la «Emergencia climática y derechos humanos». A diferencia de la CIJ, aquí las organizaciones de la sociedad civil, instituciones, e incluso particulares pueden presentar escritos llamados Amicus curiae, aportando información relevante para los jueces.

WYCJ ha entregado dos amicus, centrados en cómo el cambio climático afecta de manera desigual a las personas según su edad. En el primero, WYCJ argumenta que la Corte debe incluir el principio de equidad intergeneracional en su jurisprudencia. Aunque es un concepto técnico, se refiere a lo que conocemos como sostenibilidad: asegurar que las generaciones futuras tengan los mismos recursos.

En su amicus y en una intervención en Barbados, WYCJ instó a la Corte a declarar que las generaciones presentes tienen no solo una responsabilidad moral, sino una obligación legal de proteger el ambiente. Hasta ahora, solo un 30% de los litigios climáticos en el mundo, muchos liderados por jóvenes, han tenido éxito debido a obstáculos legales (UNEP, 2023).

Por ello, en Manaos, WYCJ solicitó a la Corte IDH que elimine las barreras legales que impiden a los jóvenes acceder a la justicia climática, incluso cuando actúan en favor de las futuras generaciones.

Esta opinión de la Corte IDH es esperada con gran expectativa, pues podría vincular las obligaciones climáticas con la protección de los derechos humanos. Además, influiría en la CIJ, que podría basar su decisión en los altos estándares de derechos humanos establecidos por la Corte IDH. WYCJ, una de las pocas organizaciones juveniles en las audiencias, aseguró que su visión sobre justicia intergeneracional tendrá impacto en el fallo.

LA NUEVA ERA DE LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Las juventudes lideran este momento decisivo para el planeta. Desde las aulas hasta las cortes internacionales, han demostrado que su voz es esencial. Con la participación de WYCJ en la CIJ y la Corte IDH, el mensaje es claro: la justicia climática no puede esperar. Las próximas decisiones de estos tribunales podrían establecer precedentes históricos que responsabilicen a los Estados con las generaciones actuales y futuras.

BIBLIOGRAFÍA

Save the Children. (2021).

Nacer en un mundo en crisis climática: por qué debemos actuar ahora para garantizar los derechos de la infancia.

<https://savethechildren.org.sv/wp-content/uploads/2021/09/Resumen-ejecutivo-Nacer-en-un-mundo-en-crisis-climatica-Por-que-debemos-actuar-ahora-para-garantizar-los-derechos-de-la-infancia-Espanol.pdf>

United Nations Environment Programme (2023).

Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review.

<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/43008>.



3. LA HUELLA FEMENINA EN ESPINAR

Por Rosa Luz Checca Aparicio
Activista.

Foto: Área de Comunicación e Incidencia Política de Derechos Humanos Sin Fronteras - Alfredo Coila

Durante el siglo pasado, las mujeres de Espinar enfrentaron severas limitaciones derivadas de una estructura patriarcal profundamente arraigada. Los relatos transmitidos por padres y abuelos muestran cómo las mujeres no solo fueron marginadas en la toma de decisiones dentro del hogar, sino también excluidas de la participación social. El acceso a la educación era restringido por la falta de instituciones cercanas y medios de transporte, mientras que las pocas escuelas disponibles solían estar destinadas exclusivamente a varones, como el colegio Coronel Ladislao Espinar. En contraste, las mujeres debían dedicarse a las tareas domésticas y al cuidado de los animales.

Más adelante, se creó una institución educativa primaria, conocida inicialmente como Centro de niñas y hoy llamada Almirante Miguel Grau, que brindó mejores oportunidades de educación a las mujeres de aquella época. Ahí, ellas se preparaban

y aprendían aspectos económicos básicos, como contar y familiarizarse con las monedas y billetes peruanos. Esto también contribuyó al desarrollo económico de la región, pues las primeras mujeres comerciantes de Espinar comenzaron a surgir. Estas comerciantes y otros emprendedores empezaron a sindicalizarse y organizarse, fortaleciendo vínculos y creando más espacios para el emprendimiento.

**LA EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS MINERALES
COMO EL COBRE, EL ORO
Y LA PLATA HA CAUSADO
UN DAÑO ECOLÓGICO
SIGNIFICATIVO**

LAS FUENTES ECONÓMICAS Y LA LUCHA AMBIENTAL

La economía de Espinar ha estado vinculada históricamente a la agropecuaria, con la producción de papa y derivados como el chuño, y la crianza de ganado ovino, vacuno y camélido. Las mujeres yaureñas desempeñaron un papel fundamental en este sector, desarrollándose en diferentes rubros y reuniendo los productos de los hermanos agricultores del campo. Sin embargo, su progreso se vio obstaculizado por la contaminación ambiental generada por la minería.

Desde la llegada de la minera transnacional Tintaya en 1981, la explotación de recursos minerales como el cobre, el oro y la plata ha causado un daño ecológico significativo, afectando la tierra, el agua y la salud de los animales y las comunidades. Debido a este impacto, las mujeres enfrentaron mayores dificultades para comercializar los productos agrícolas, encontrando además barreras sociales, ya que en otras provincias y departamentos se estigmatizaban los productos de Espinar por considerarlos provenientes de un territorio contaminado.

Además, las industrias mineras han provocado el despojo y la expropiación de territorios a las comunidades campesinas, afectando especialmente a las mujeres, quienes han sido víctimas de violencia y represión durante las protestas sin recibir ninguna protección por parte del Estado.

MOVILIZACIÓN Y RESISTENCIA FEMENINA

En la década de los noventa, la resistencia contra la minería tomó fuerza con la primera toma de la mina Tintaya, en la que se alzaron todas las organizaciones gremiales, incluyendo las organizaciones de mujeres. La participación femenina en enfrentamientos como huelgas y manifestaciones ha sido crucial. Las mujeres siempre han estado en pie de lucha, buscando involucrarse en cuestiones políticas desde los inicios de las revueltas. La Federación de Mujeres Kana (FEMUK) surgió para proteger el medio ambiente y los derechos de las familias afectadas. Esta organización permitió que las mujeres tuvieran un rol activo en la política local a través de sus discursos, y procuró posicionarse dentro del contexto de las movilizaciones, reformulando narrativas tradicionalmente machistas para abrirles espacio a otras mujeres en la política desde una perspectiva distinta.



Foto: Alto Huarca, Créditos: Álbum de colección Espinar de Antaño Espinar, provincia de vida

Con el tiempo, FEMUK desarrolló nuevas estrategias y formó alianzas con otras organizaciones mixtas para ampliar su impacto. Estas colaboraciones fortalecieron su posicionamiento y facilitaron la integración de otras mujeres en los sectores políticos y públicos, destacando especialmente su trabajo en conjunto con las comerciantes del mercado central SUCME. Aunque enfrentaron violencia y represión, estas mujeres persistieron, logrando que se discutieran sus demandas a nivel nacional.

La lucha no se detuvo ahí. En 2003, las comunidades organizaron un paro indefinido, con el fin de establecer un diálogo y llegar a un acuerdo equitativo. Finalmente, se firmó un convenio marco con la empresa.

Sin embargo, este no tenía garantías de salubridad ni resarcimiento de los daños causados, sino que se trataba de un paliativo que ocupaba el 3 % de sus ganancias.

Aunque los acuerdos alcanzados no resolvieron completamente los problemas, marcaron un hito en la movilización comunitaria. En 2012, otro paro trágico dejó víctimas mortales, reflejando la gravedad de los conflictos sociales y ambientales en la región.

Foto:
Traje típico de Espinar, Año 1985-1990,
créditos: Álbum de colección Espinar
de vida



LIDERESAS TRASCENDENTALES EN ESPINAR

Las mujeres de Espinar han mostrado un compromiso inquebrantable en la defensa de su territorio y comunidad. Líderes como Beatriz, de la comunidad campesina Mollocchua, participa en la mesa de diálogo de Tintaya desde 2002 y es representante de los habitantes de la Cuenca del Río Salado; Carmela, presidenta de APAMAFA de la comunidad campesina Tintaya Marquiri y delegada en numerosas comisiones de la mesa de diálogo; Francisca, de la comunidad campesina Huano Huano, presidenta de la Asociación de Mujeres afectadas por la minería; Gabriela, de la comunidad campesina Huancané Bajo (sector Qescapata), participó en la mesa de diálogo de Tintaya desde 1999 a 2003 y fue presidenta del Comité de Mujeres de su comunidad, así como tesorera y fiscal, entre muchas otras, han sido pioneras en la organización de sus comunidades, mientras que otras, como Elsa y Leonela Labra, se han destacado en movimientos ambientalistas y juveniles.

Estas mujeres han desafiado las normas sociales fundamentadas en la dominación masculina y han forjado un camino hacia la participación política, formando colectivos como Kana Warmis y el colectivo Yana Yawar.

A pesar de los desafíos, su lucha ha visibilizado la necesidad de justicia ambiental y ha promovido un liderazgo femenino resiliente, capaz de incidir en políticas públicas y exigir un futuro digno para Espinar. Las mujeres continúan levantando su voz en defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, enfrentando muchas veces la indolencia del Estado.

**ESTAS MUJERES
HAN DESAFIADO LAS
NORMAS SOCIALES
FUNDAMENTADAS EN
LA DOMINACIÓN
MASCULINA**



Foto: Área de Comunicación e Incidencia Política de Derechos Humanos Sin Fronteras - Alfredo Coila

REFERENCIAS

Soria, L. (2017). Liderazgos femeninos en contextos mineros. Caso Tintaya en Espinar, Cusco [tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. / <https://core.ac.uk/download/pdf/323344023.pdf>



4. SER ACTIVISTA JOVEN EN UN CONTEXTO DE CRISIS CLIMÁTICA

Ruddy Andres Cabello Iraipi
Activista Indígena Gwarayu
Bolivia

Foto: Red Juvenil departamental de Santa Cruz por el clima

Desplazarse en una sociedad conflictiva y adultocéntrica como la boliviana para un joven que busca generar cambios sociales en un entorno salvaje y depresivo a causa de cegueras ideológicas, modelos de desarrollo extractivistas y una sociedad polarizada, tanto de forma política («masistas contra opositores») como discriminatoria y racista («cambas contra collas»), resulta muy complicado.

La juventud que lucha y se moviliza en este panorama se enfrenta a las críticas de adultos que sostienen la idea de que «si no se desmonta, no hay que comer», un pensamiento que está instalado en la mente de personas que no son ajenas a los territorios donde se desarrollan actividades que amenazan «nuestra casa grande» o Yande Ka'a gwasu, como decimos los pueblos indígenas del oriente de Bolivia en idioma Gwarayú, nación indígena a la que pertenezco. Ejercer activismo siendo joven es tener

conciencia de los cambios negativos que estamos experimentando no solo como consecuencia de la crisis climática actual —la cual es fruto de la actividad humana, las grandes empresas y los modelos de desarrollo impulsados por los gobiernos, que afectan los territorios que habitamos los pueblos indígenas de tierras bajas—, sino también del tráfico de tierras y los avasallamientos perpetrados por grupos que no comparten el mismo sentido de pertenencia ni el compromiso con el cuidado de estos territorios.

**EL LIDERAZGO
CORROMPIDO DE
LAS AUTORIDADES
INDÍGENAS DIVIDE
A LA POBLACIÓN**

Ejercer activismo siendo joven es ser consciente de los cambios negativos que estamos experimentando en nuestras vidas, los cuales no solo son consecuencia de la crisis climática actual, generada por la actividad humana, las grandes empresas y los modelos de desarrollo impulsados por los gobiernos, que afectan los territorios habitados por los pueblos indígenas de tierras bajas. También somos testigos del tráfico de tierras y los avasallamientos perpetrados por grupos que no comparten el mismo sentido de pertenencia ni el compromiso con el cuidado de estos territorios.

Desde la realidad mía, puedo decir que existe una culpabilidad por parte de dirigentes indígenas que, más que «un simple pedazo de tierra», negocian la vida de nosotros, los jóvenes. El liderazgo corrompido de las autoridades indígenas divide a la población, que busca una representación legítima y verdadera, pero solo encuentra intereses políticos partidarios y económicos personales. De ese modo, es imposible que surjan nuevos liderazgos, como los que están latentes en la juventud indígena de tierras bajas y que tienen un sentido más orgánico y auténtico.

En los últimos años hemos sido testigos de incendios que afectan gravemente nuestro territorio. Estos atentados ecocidas se han ido normalizando, ya que son percibidos como eventos que suceden cada año, sin cuestionar ni condenar a quienes están detrás. Aunque no se puede atribuir la responsabilidad a un solo grupo, es crucial mencionar que la disputa por la tierra en áreas fiscales y Tierras Comunitarias de Origen (TCO) —pertenecientes a los pueblos indígenas— es uno de los factores principales.

Las tierras en disputa se ven gravemente afectadas por el desmonte de bosques, un proceso de eliminación o destrucción de áreas boscosas para utilizar la tierra para otros fines, como la agricultura y la ganadería. A medida que la demanda de tierras para cultivos y pastoreo aumenta, los bosques son talados para dar paso a nuevas áreas agrícolas o ganaderas. Esto incluye la creación de monocultivos, como los de soja, palma aceitera y otros productos comerciales, así como el crecimiento de la ganadería, que requiere grandes extensiones de tierra para el pastoreo de animales.



Foto: Proyecto Conservemos Nuestros Paños

El desmonte de bosques para dar paso a tierras agrícolas o ganaderas no solo aumenta el riesgo de incendios, sino que también degrada el medio ambiente, afectando la biodiversidad, los recursos hídricos y las condiciones de vida de las comunidades. Así, quedamos expuestos a condiciones precarias como resultado de una política de expansión que prioriza los intereses económicos sobre la conservación ambiental.

Por otro lado, las políticas del gobierno nacional promueven la expansión de la frontera agrícola. Una de ellas es la Ley N° 741, Ley de autorización de desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas. Esta ley fue aprobada el 29 de septiembre de 2015 y en su Artículo I (Objeto) establece lo siguiente: «La presente Ley tiene por objeto autorizar el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de Autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con la Madre Tierra, protegiendo las funciones ambientales».

El Artículo 3 (Autorización), por su parte, dispone que, al entrar en vigencia, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) podrá autorizar el desmonte de hasta veinte hectáreas en tierras con cobertura boscosa, aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, solo con una Resolución de Autorización «de forma expedita y simplificada», y sin la necesidad de presentar Planes de Ordenamiento Predial (POP) ni Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra. Esto se aplica tanto a pequeñas propiedades como a propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos.

Esta normativa representa un grave riesgo, ya que autoriza el desmonte en áreas destinadas a la producción forestal, es decir, en zonas que no son aptas para actividades agrícolas o ganaderas. Además, permite el asentamiento de personas afines al Gobierno en estos territorios sin la presentación de los planes mencionados, lo cual se justifica bajo el pretexto de garantizar la soberanía y seguridad alimentarias. Sin embargo, esta medida vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, reconocido en la Constitución Política del Estado de Bolivia.



Foto: Google - Amazonía deforestación

En su capítulo cuarto, sobre los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC), el Artículo 30 establece que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte, mientras que el Artículo 352 subraya que la explotación de recursos naturales en un territorio debe someterse a un proceso de consulta con la población afectada, convocada por el Estado, garantizando la participación ciudadana y promoviendo la conservación de los ecosistemas.

La problemática de las sequías prolongadas en Bolivia está estrechamente vinculada a la deforestación y los incendios. Esta relación ha convertido el acceso al agua potable en un desafío para todo el país. En los últimos años, la crisis hídrica ha llegado a zonas donde antes no se presentaba, especialmente en el oriente boliviano, afectando tanto a las poblaciones urbanas como rurales.

El desmonte de bosques ha tenido un impacto directo en los recursos hídricos, como lo demuestra el caso de la laguna Concepción en Santa Cruz, que ha perdido más de la mitad de su tamaño debido a la desaparición de la vegetación y los bosques circundantes.

El acceso al agua en los territorios indígenas es especialmente preocupante, ya que las represas, lagunas y ríos que alimentan a estas comunidades se están secando. La alteración de la distribución del agua, el aumento de las temperaturas y las cenizas generadas por los incendios provocan una cadena de efectos negativos que afectan incluso las fuentes de agua subterránea, que son vitales para las poblaciones locales. No podemos hablar de un futuro viable sin considerar estas conexiones.

A pesar de las dificultades políticas y sociales, la respuesta de la juventud organizada ha sido firme. A través de nuestras agrupaciones y organizaciones juveniles autónomas, hemos trabajado sin fines partidarios ni lucrativos, recolectando donaciones para los bomberos voluntarios y las comunidades afectadas, participando activamente en la primera línea contra los incendios y auxiliando a los animales perjudicados.

Nos mantenemos coordinados, demostrando la unidad juvenil más allá de las diferencias políticas o ideológicas.



Además, hemos generado espacios propositivos que han abierto el debate sobre el modelo de desarrollo implementado por el Gobierno. En estos espacios, surge una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente tomando decisiones sobre el uso y la producción de nuestros territorios desde una perspectiva de desarrollo que integre lo económico y lo social, o estamos convirtiendo nuestros territorios en áreas de depredación, vistas solo como objetos de explotación agrícola y ganadera? Sabemos que el concepto de riqueza no se limita a la producción, sino que debe contemplar el bienestar social y la preservación del medio ambiente.

Como juventud organizada, contamos con herramientas como nuestras agendas de participación, que abarcan aspectos ambientales, sociales y políticos. Estas se implementan en los territorios de Chiquitanos, Guarayos, Guaraní, Chaco y en las zonas metropolitanas del oriente boliviano. A través de ellas, analizamos la

situación actual y las propuestas que la juventud quiere poner en marcha, como el proyecto de monitoreo forestal en Ascensión de Guarayos. Este centro facilita la detección temprana de incendios, la deforestación y las actividades ilegales, y refuerza el compromiso juvenil con la protección de nuestros bosques y territorios.

Asimismo, impulsamos proyectos de recuperación y buen uso de los recursos hídricos, como «Conservemos Nuestros Paúros», nacido como respuesta a la sequía que afectó a Ascensión de Guarayos. Este proyecto involucra a la comunidad, el sector educativo y las autoridades locales para recuperar cuerpos de agua en mal estado y convertirlos en fuentes vitales de agua para la población en tiempos de crisis hídrica.

El Encuentro Juvenil Departamental por el Clima es otra de nuestras iniciativas. Su objetivo es fortalecer la capacidad de las organizaciones juveniles para abordar



Foto: Red Juvenil departamental de Santa Cruz por el clima

cuestiones ambientales y fomentar la participación de la juventud en la toma de decisiones a nivel local y departamental. Como resultado de estos encuentros, se creó la Red Departamental de Santa Cruz por el Clima, que agrupa a organizaciones juveniles de todo el departamento para coordinar actividades y ejecutar proyectos ambientales de manera orgánica y equitativa.

El trabajo de los jóvenes activistas en Bolivia se desplaza como una esperanza de cambio, movilizándonos constantemente para enfrentar los desafíos sociales, políticos y ambientales. Aunque el camino es largo y lleno de obstáculos, la unidad y el espíritu de compromiso de la juventud boliviana son nuestros pilares para seguir luchando por un futuro más justo y sostenible.

**¿ESTAMOS
REALMENTE
TOMANDO
DECISIONES
SOBRE EL USO
Y LA PRODUCCIÓN
DE NUESTROS
TERRITORIOS?**



5. SIENDO ARTIVISTA DE UN PAÍS EN DECONSTRUCCIÓN

Yanela Suarez

Artivista independiente investigadora socio cultural

Foto: Alessandro Cinque, Infobae

En 2024, el Perú celebra 203 años de lucha y resistencia histórica (Pereyra, 1975). Sin embargo, hoy en día, debido a la persistencia de un régimen dictatorial, pareciera que estos conceptos solo pueden evocarse en la literatura, concebidos como parte de nuestro pasado, pero no como una realidad presente o un posible futuro. Al igual que en las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, seguimos en la búsqueda de nuestra independencia. Nos mantenemos en pie para recuperar nuestro territorio y la identidad que quedó marcada por el desgarrador y sangriento proceso de colonización.

Antes luchamos contra un ejército español; ahora, enfrentamos a un ejército criminal. Esta contienda nos alienta a mantener viva la memoria histórica para que, en comunidad, podamos hacerle frente nuevamente a quienes buscan apropiarse de nuestra patria.

El camino que elegí como artivista está impregnado de un legado histórico que es necesario mencionar, pues define mi identidad y la razón de mi incidencia, la cual surge de esas voces, conexiones, experiencias y cuerpos que nos han acompañado. Hace dieciocho años conocí verdaderamente a mi bisabuela, hija de una familia humilde y quechuahablante del centro del país. Como la mayor de ocho hermanos, asumió a una corta edad la responsabilidad de cuidar y encargarse del hogar tras la pérdida de su madre.

Recuerdo que ella solía decirme que guardara silencio, que no fuera tan inquieta, aunque su propia personalidad mostraba lo contrario. Por otro lado, su hija, mi abuela, es una mujer trabajadora que se aventuró a recorrer las rutas del Valle de las Flores al volante. Desde joven, decidió no ser un instrumento más del hogar.

En cambio, se enfocó en convertirse en todo lo que había oído que una mujer podía lograr, algo que la generación anterior no había podido experimentar. Sin embargo, para ella, ese camino ha sido arduo e interminable.

Ahora les presento a mi madre, Rosario, quien siempre permitió que descansáramos sobre sus piernas, incluso cuando estas ya no tenían fuerzas. Ella nos enseñó el coraje y la búsqueda de la justicia. Para esta mujer, tener una vida digna ha sido un desafío, ya que forma parte de una comunidad diversa e históricamente marginada.

Para mí, el rostro de mi abuela representa el de muchas mujeres quechuas, tan similares y a la vez tan diversas. Con el tiempo, comprendí que durante el proceso de colonización nos arrebataron la identidad y el sentido de comunidad. Hicieron que personas como mi bisabuela sintieran vergüenza de su lengua, su origen y su cultura, instalando la creencia de que los colonizadores eran superiores en poder, inteligencia y desarrollo. Con esta idea, justificaron la necesidad de «reeducarnos».

Muchas personas tuvieron que adaptarse, ya que era la única manera de sobrevivir en este sistema impuesto a la fuerza, lo que implicó renunciar a su herencia histórica y cultural con la esperanza de ofrecer una vida mejor a las generaciones futuras. Así, poco a poco, se fueron internalizando narrativas colonizadoras. Esa desconexión con la propia identidad, que estoy segura de que compartimos la mayoría de peruanos y peruanas, refleja la dificultad de conectar entre nosotros con respeto y en comunidad.

A través de este proceso de recuperación de mi identidad, he aprendido a observar y escuchar con atención tanto el pasado como el presente. Este enfoque me ha permitido comprender la desigualdad social estructural que seguimos enfrentando, no solo como parte de nuestro legado histórico, sino

también como consecuencia de la ruptura con nuestra identidad. En ese sentido, como activistas, enfrentamos el desafío de abrazar nuestra memoria y reconocernos en nuestra pluriculturalidad, lo que nos permite volver a conectar con ella.

A pesar de las numerosas batallas libradas, aún nos encontramos en el proceso de construir un Estado eficiente, igualitario y un pueblo plenamente consciente. Sin embargo, aunque nos falta un largo camino por recorrer, hoy reconocemos las profundas brechas que atravesamos, como consecuencia de haber permitido la imposición de un sistema deshumanizante, racista, clasista, machista y opresor.

Nuestras experiencias nos han permitido comprender que no solo tenemos el poder, sino también la responsabilidad de transformar nuestras realidades. Si bien existe un temor generalizado a enfrentar el sistema, a causa de la represión sistemática, la historia demuestra que, cuando la ciudadanía se organiza, recuperar los derechos arrebatados es posible.

**ANTES
LUCHAMOS
CONTRA UN
EJÉRCITO
ESPAÑOL;
AHORA,
ENFRENTAMOS
A UN EJÉRCITO
CRIMINAL**

Actos políticos y transgresores como las manifestaciones cobraron especial relevancia en 2020. Las calles se llenaron de personas que marchaban en contra de la destitución del expresidente Martín Vizcarra. En ese contexto y en complicidad con el Congreso, Manuel Merino asumió abruptamente la presidencia. Su breve régimen se distinguió por la brutal represión policial que provocó las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado el 14 de noviembre, mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta. Este caos institucional, junto con las numerosas muertes registradas a nivel nacional, dejó claro que las autoridades estaban dispuestas a cometer crímenes y permitir violaciones a los derechos humanos con el fin de silenciarnos, y reafirmar así la ausencia de justicia en nuestro país.

Lamentablemente, la violencia sistemática nos ha empujado a normalizar el coexistir con la criminalidad y la corrupción infiltradas en todas las instituciones y esferas sociales, y hemos aceptado como un hecho que quienes deberían representar al pueblo frecuentemente se beneficien con sobornos por cada obra realizada. Esta aceptación ha favorecido el crecimiento de un individualismo generalizado, impulsado por una profunda desconfianza, que nos ha llevado a considerar la privatización de servicios como la única alternativa viable y a fomentar el divisionismo en nuestra búsqueda de supervivencia económica.

**EL LENGUAJE
ARTIVISTA
TRANSFORMA
LOS PARADIGMAS
DE APRENDIZAJE
SENSORIAL**

El funcionamiento económico de nuestro país está vinculado a acuerdos que responden a intereses particulares, a la vez que el crimen se ha infiltrado en nuestra estructura política. Según Otra Mirada (2024), ciertos actores han asegurado su permanencia como representantes ilegítimos mediante la manipulación de poderes. Parte de su estrategia ha consistido en modificar la Constitución de 1963, que durante años sirvió como una guía oligárquica diseñada para «preservar el orden» y fomentar un supuesto desarrollo.

Por su parte, Ojo Público (2024) informa que más de veintiséis leyes han sido alteradas en beneficio de miembros del Estado, y estima que el 50 % de estas modificaciones han afectado gravemente la institucionalidad, generando consecuencias negativas en áreas como la educación, la salud, el medio ambiente, el transporte y la igualdad de género, además de perjudicar la democracia y la economía. También señalan que cambios legislativos específicos, como los introducidos por las leyes 31973 y 32108, han facilitado a las mafias atacar contra la vida y el territorio.

La ciudadanía ha manifestado una clara desaprobación hacia la presidenta Boluarte y el Congreso formado por alianzas criminales, evidenciando su descontento ante su evidente entorpecimiento en la mejora de las condiciones de vida de las personas, especialmente frente a las olas de criminalidad y las muertes ocurridas durante la represión de las protestas a nivel nacional en 2022 y 2023. A pesar del marcado divisionismo que atraviesa nuestro país, donde la necesidad de identificarse como partidario de la derecha o la izquierda parece prioritaria sobre cualquier intento de unión, ha quedado demostrado que muchas personas están decididas a movilizarse, incluso frente al estigma del terruqueo y la estrategia estatal de sembrar miedo, a través de leyes que restringen derechos, obstaculizan la movilización y pretenden silenciar al pueblo.

Las extorsiones y el sicariato en el Perú no son fenómenos aislados. Todo lo contrario. Representan el efecto directo de un sistema de corrupción estructural incrustado en la administración estatal. Esta criminalidad se ha infiltrado en sectores vulnerables, afectando especialmente a microemprendedores, como bodegueros y transportistas, quienes, ante las amenazas y el riesgo constante,

han tenido que cerrar sus negocios o modificar sus rutinas diarias.

Además, la percepción generalizada de inseguridad ha hecho que muchos ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones públicas, como la Policía Nacional y el Poder Judicial, lo que refleja una deficiencia en la protección estatal.



Imagen: Puno sí es el Perú, de Ruth Ingaluque, La República

En síntesis, la sensación de vulnerabilidad constante que atraviesa la población es consecuencia no solo de la incapacidad de las autoridades para garantizar su seguridad, sino también de su evidente disposición a cometer crímenes contra ella. Así, la falta de respuestas efectivas por parte del Estado ha socavado la confianza en sus instituciones, intensificando tanto el miedo como la sensación de desprotección.

Como resultado, muchas comunidades han optado por organizarse de manera autónoma, estableciendo redes de apoyo mutuo o recurriendo a medidas de autoprotección.

Asimismo, ciudadanos históricamente alejados de la participación política se han organizado para reclamar sus derechos. Pese a la manipulación mediática y las estrategias de miedo impulsadas por el Estado, ha surgido un movimiento unificador que involucra a estudiantes, activistas, artistas y líderes comunitarios comprometidos en la lucha por un país libre de corrupción y violencia.



Foto: Alessandro Cinque, Infobae

Lo expuesto anteriormente nos ayuda a comprender la compleja situación que atravesamos como país y la importancia del legado histórico que debemos restaurar. En ese sentido, este artículo tiene como objetivo plantear un proceso de deconstrucción que implica analizar cómo las estructuras históricas de poder y las relaciones sociales heredadas continúan influyendo en nuestra realidad, perpetuando ciclos de injusticia y desigualdad. La comprensión de estas dinámicas es crucial para identificar los elementos que necesitamos transformar y reconstruir, con el fin de lograr una sociedad más equitativa y consciente de su identidad pluricultural.

Las artes nos brindan la oportunidad de reconectar desde una perspectiva humanista y crítica hacia las realidades que enfrentamos. El artivismo, un término que fusiona «arte» y «activismo» (Jivkova, 2018), se ha convertido en una forma de exploración y creación con un enfoque que integra la búsqueda de la transformación social con la expresión artística, permitiendo intervenciones tanto individuales como colectivas. Gutiérrez (2021) sostiene que el artivismo representa una herramienta poderosa para la participación ciudadana, influyendo en acciones políticas y hechos sociales, y contribuyendo así a generar un equilibrio entre el Estado y la sociedad.

**LAMENTABLEMENTE,
LA VIOLENCIA
SISTEMÁTICA NOS
HA EMPUJADO A
NORMALIZAR EL
COEXISTIR CON LA
CRIMINALIDAD Y LA
CORRUPCIÓN**

Este enfoque impulsa al activista a desarrollar una conciencia ideológica, política y social que se refleja en acciones comprometidas con el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Esta movilización, orientada a la defensa del bien común, fomenta un compromiso profundo con la acción y el cambio colectivo, como afirma Reyes (2017).

Ser activista es asumir una multiplicidad de roles: educar, informar, sensibilizar, negociar, denunciar y empatizar. Este compromiso se orienta hacia objetivos sociales, buscando construir una sociedad más justa mediante la creación de puentes de diálogo y el uso de herramientas que promuevan el entendimiento mutuo.

Aunque cada activista tiene un propósito particular y utiliza diversos recursos, todos abordan los problemas desde una perspectiva social y sensibilizadora, y muestran un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y el bienestar común.

Admiro las intervenciones activistas, que destacan por su postura crítica y su capacidad de respuesta frente a las circunstancias políticas. Ejemplos notables incluyen las acciones simbólicas como la alfombra de Semana Santa en Huamanga, que representaba el dolor por las pérdidas humanas durante las movilizaciones del 15 de diciembre de 2023, y las obras presentadas en el desfile de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito en Cusco, como La descarada y La trilogía andina, que denunciaron a Dina Boluarte como responsable de las muertes durante las protestas.

Estas expresiones artísticas, aunque valientes, han enfrentado la censura estatal, evidenciando cómo el sistema reprime las voces disidentes y privilegia el control sobre la libertad de expresión.



Foto: iStock

Este contexto de represión subraya la necesidad de articular el arte como un vehículo para transmitir información accesible y enriquecer el diálogo ciudadano. Las manifestaciones artísticas, como la música y el teatro, se han transformado en instrumentos clave para reducir las brechas de información y fomentar la conciencia colectiva.

Además, el activismo se caracteriza por su flexibilidad, lo que permite aplicarlo en múltiples ámbitos, fortaleciendo así redes comunitarias y promoviendo alianzas.

Los artistas en el Perú enfrentan el desafío de llevar sus ideas a cabo, empleando métodos didácticos que transformen espacios comunes en lugares de reflexión, concientización y autoexploración. Centella (2015) destaca que la educación crítica es capaz de generar configuraciones sociales e individuales al involucrar activamente a quienes aprenden.

Restituir el poder colectivo parece un proceso largo y doloroso en el que el país podría seguir derramando sangre. Precisamente por esta razón, los activistas y artistas deben enfocarse en fortalecer las capacidades de ciudadanos comprometidos, dispuestos a luchar por un lugar mejor. Como señala Freire, no buscamos vivir en un mundo utópico, sino tener una vida digna.

El lenguaje artista transforma los paradigmas de aprendizaje sensorial, cognitivo, emocional y relacional, facilitando la transmisión de experiencias que fortalecen la autonomía y la conciencia. Como estrategia y acción artística, este lenguaje incide políticamente y promueve cambios sociales significativos (Mesías, 2018).



Foto: La Descarada, Wayka

Un aspecto clave en la deconstrucción es el fortalecimiento de nuestros conocimientos sobre memoria y resistencia. Esto implica honrar la valentía de mujeres como Petronila Avelerira, Paula Huamán y Eufrasia Ramos, guerrilleras tarmeñas ejecutadas brutalmente durante la independencia, así como reconocer a líderes indígenas contemporáneos como Santiago Contoricón Antúnez y Gonzalo Flores Pío, asesinados recientemente. Estos ejemplos históricos y actuales nos recuerdan que la lucha por la vida, el territorio y la igualdad sigue siendo una cuestión de supervivencia.

A pesar de los riesgos, es necesario transformar la participación activa en una responsabilidad colectiva. Si cada ciudadano asume su papel en la defensa del bien común y los derechos humanos, nuestro país tendrá la fuerza necesaria para revertir la situación de injusticia social y ambiental. Solo así podremos construir un futuro en el que los principios del buen vivir prevalezcan, destacando una convivencia equitativa con el entorno natural y las demás personas, y priorizando el bienestar colectivo por encima del crecimiento económico individual.

**EL LENGUAJE
ARTIVISTA
TRANSFORMA
LOS PARADIGMAS
DE APRENDIZAJE
SENSORIAL**



ecos

≈ mocicc

Con el apoyo de:



Bélgica

socio para el desarrollo

111

misereor
TEJIENDO UN MUNDO JUSTO

CNCD

11.11.11

www.mocicc.org

